

DON ALBERTO IBARRA CUCALÓN, Árbitro designado por Resolución de fecha 19 de septiembre de 2002 del Director General de Empleo y Relaciones Laborales del Gobierno de La Rioja, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 76.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el art. 31 del R.D. 1844/94, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación de los Trabajadores en la empresa, dicta el presente

LAUDO
ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 11 de septiembre de 2006 tuvo entrada en el Registro de la Oficina Pública de Elecciones Sindicales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, escrito de impugnación presentado por D. AAA, en nombre y representación de la Unión Sindical Obrera de La Rioja en relación con el proceso electoral desarrollado en la empresa X, S.A.

En dicho escrito se interesaba la nulidad *"de dicho proceso electoral retrotrayéndose las actuaciones al momento de constitución de la Mesa Electoral donde se facilite el censo incluyendo a los trabajadores de todos los centros de trabajo en La Rioja de la mencionada empresa"*.

SEGUNDO. El mismo día, y en relación al mismo proceso electoral, tiene entrada escrito presentado por D. BBB en nombre de la Unión Regional de CC.OO. de La Rioja solicitando la declaración de *"nulidad del proceso electoral iniciado por constitución de la mesa el 7 de septiembre, declarando la obligación de la empresa de aportación de los datos necesarios para la constitución de la mesa de acuerdo con el preaviso presentado el 26 de junio de 2006, con independencia de las reclamaciones que contra dicho acto pudiera interponer"*.

TERCERO. Con fecha 27 de septiembre de 2006 tuvo lugar en ambos procedimientos la comparecencia a la que se refieren los artículos 76.6 del Estatuto de los Trabajadores, y 41 del Real Decreto 1844/94 de 9 de septiembre.

A la misma, asistieron las partes que constan en el acta levantada.

CUARTO. Abierto el acto, se realizaron las manifestaciones que consideraron oportunas las partes, cuyo contenido consta en el acta de comparecencia y se practicaron las pruebas propuestas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. Aun no de manera expresa, por la representación del Sindicato Unión General de Trabajadores se alegó la falta de impugnación por parte de CC.OO. del preaviso posterior presentado por dicho Sindicato UGT.

Igualmente, se efectuaron determinadas manifestaciones relativas a la no impugnación ni en vía judicial ni en otra vía de injerencias o vulneraciones del derecho de libertad sindical por parte de X, S.A.

Entendemos, sin embargo, que tal y como manifestó en el acto de comparecencia la representación de CC.OO., el Ordenamiento Jurídico establece diferentes cauces de impugnación de contenido y alcance distinto. El Sindicato impugnante es libre de elegir, o incluso simultanear, los que considere oportunos. En nuestro caso -y con un objeto muy concreto- ha decidido la impugnación del proceso electoral a través del procedimiento arbitral que regula el Real Decreto 1844/1994 y que resulta el adecuado para resolver la controversia planteada.

SEGUNDO. Por parte de X, S.A. se formuló la excepción de inadecuación de procedimiento al entender que el cauce correcto es el proceso ordinario al versar la impugnación sobre preaviso electoral.

Tiene razón X, S.A. al afirmar que la última doctrina -concretada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2006- parece inclinarse por considerar que el preaviso electoral no forma, todavía, parte del proceso electoral y, por tanto, su impugnación no debe hacerse mediante el procedimiento arbitral.

Esa tesis -que incluso, en nuestra opinión, debe acogerse con prudencia analizando caso por caso, si en realidad no estamos ante una cuestión de mayor alcance y calado que el hecho simple del preaviso- no es aplicable en nuestro caso ya que la impugnación formulada por ambos Sindicatos se refiere a la constitución de la Mesa

Electoral, acto que -como el Sindicato USO recordó- ya forma parte del proceso electoral.

TERCERO. La cuestión de fondo que se discute en el presente procedimiento está claramente fijada por las partes: analizar si se puede entender que la Oficina de X, S.A. ubicada en la calle Y de Logroño constituye Centro de Trabajo, a efectos de poder ser considerado circunscripción electoral.

Como tuvimos ocasión de indicar, por ejemplo, en el Laudo n° 23/99, detrás de la aparente sencillez de dicho planteamiento, se encuentra, sin embargo, una de las cuestiones de más difícil resolución práctica en el proceso electoral sindical.

Como punto de partida, ha de señalarse que la circunscripción electoral es el ámbito donde va a desarrollarse el proceso electoral. Por ello, previamente a la celebración de dicho proceso, debe determinarse, cual es la circunscripción electoral en cada caso.

Dicha circunscripción será, de acuerdo con el art. 63 ET, *"la empresa o centro de trabajo"*, indicándose, a continuación, reglas especiales para aquellas empresas que tengan varios centros de trabajo.

Consecuencia de ello es que el legislador no ha distinguido debidamente entre empresa y centro de trabajo, lo que, en la práctica, produce situaciones de inseguridad jurídica y conflictos de intereses entre empresarios y promotores del proceso electoral, *"siendo normal que el empresario manifieste una tendencia restrictiva respecto del reconocimiento de unidades productivas como centros de trabajo, pues, a menos número de representantes, menor será también el número de horas asignadas en garantía de su función representativa, y, por contra, los Sindicatos tienden a ampliar el número de centros de trabajo"* (Rodríguez Ramos: "Procedimiento de elecciones a representantes de trabajadores y funcionarios").

Así las cosas, la definición legal de Centro de Trabajo puede encontrarse en el art. 1.5 del ET. Conforme al mismo, se considera Centro de Trabajo, a los efectos de dicha Ley, *"la unidad productiva con organización específica que sea dada de alta, como tal, ante la Autoridad Laboral"*.

El mismo concepto se repite en el Reglamento de Elecciones a Órganos de representación de los trabajadores, en su artículo 5.1 (siquiera en una ubicación incorrecta, cuando se está refiriendo a la constitución de la mesa electoral).

Es, igualmente, el concepto que se contenía en normas pretéritas (p. ej., art. 4 R.D. 1311/86 de 13 de junio).

Como hemos dicho, tal concepto ha provocado situaciones de inseguridad jurídica que han dado lugar a soluciones diferentes para supuestos iguales.

CUARTO. Por ello, trataremos, en primer lugar, de analizar cuáles son los requisitos necesarios para que se entienda que existe Centro de Trabajo, para, a continuación, concluir si los mismos concurren o no en nuestro caso.

Los elementos que conforman la definición de Centro de Trabajo son de carácter formal y de carácter material.

El elemento de carácter formal vendría dado por la circunstancia de que el Centro de Trabajo deberá estar dado de alta, como tal, ante la Autoridad Laboral.

La doctrina ha tenido ocasión de considerar este requisito como "*accidental y externo a la realidad material del Centro de Trabajo*" (Laudo 3-2-95 dado en Albacete por D^a María José Romero Ródenas), o de carácter declarativo (Cruz Villalón, Escudero Rodríguez, etc.).

Diferentes Resoluciones judiciales (p. ej., T.C.T. 27-7-87 Ar. 4597, ó 9-3-87 Ar. 7058, citadas por González Martín en "Representación y Acción sindical de los trabajadores en la empresa"), recuerdan que el alta ante la Autoridad Laboral implica una conducta evidenciadora de su decidido propósito de reconocer la unidad técnica y productiva. Aunque no se trata de una exigencia esencial o trámite constitutivo para la existencia del Centro de Trabajo, causada el alta a iniciativa del empresario, hay que presumir la existencia real del Centro de Trabajo.

Debe recordarse, por otro lado, que el art. 6 del R.D.L. 1/86 de 14 de marzo, y su O.M. de desarrollo de 6 de mayo de 1988, suprimió la previa, y hasta el momento obligatoria, autorización administrativa para proceder a la apertura de un Centro de Trabajo y para reanudar los trabajos en él, después de haber efectuado modificaciones de importancia, estableciendo al mismo tiempo que "*en adelante, será suficiente la comunicación de la apertura del Centro de Trabajo o de la reanudación de los trabajos*" a la autoridad administrativa.

En consecuencia, se alcanzará la conclusión de que el hecho del alta administrativa supondrá una presunción *iuris tantum* de la existencia de Centro de Trabajo, pero, como recuerda el Laudo dado en Albacete el 3-2-95 (Arbitro Sra.

Romero Ródenas), podrá ser destruida mediante prueba de la no concurrencia de los restantes requisitos exigidos.

QUINTO. Los dos elementos materiales que conforman el concepto de Centro de Trabajo, son lo que lo definen como unidad productiva con organización específica; elementos que, como se puede observar, son realmente indeterminados.

El Centro de Trabajo es una *"unidad productiva"*.

Recuerdan Ramírez Martínez y Sala Franco ("El Centro de Trabajo. Configuración legal") que el Centro de Trabajo presupone una unidad de producción autónoma, técnicamente viable con independencia del resto de la empresa, pero que, como elemento definitorio o ulterior, goce de *"especialidad"* organizativa. Es decir, deben existir autonomía técnica o productiva y autonomía organizativa.

Como recuerda el Laudo de 17 de marzo de 1999 (dado en Logroño por D^a Eva Gómez de Segura), por unidad productiva autónoma debe entenderse *"el Centro de trabajo o unidad de explotación claramente diferenciado que constituya una unidad socioeconómica de producción susceptible de tráfico jurídico (Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de La Rioja de 24 de febrero de 1992)"*.

El último elemento configurado del concepto de Centro de Trabajo será el de organización específica. Organización específica que equivaldrá a *"autonomía organizativa que la individualiza dentro del conjunto empresarial, sin que esto suponga privar a la empresa del poder general de planificar y regir la vida entera del negocio"* (S. T. C. T. 9-3-87).

SEXTO. Una vez precisados los elementos generales que conforman el concepto de Centro de Trabajo, debe descenderse al caso concreto que nos ocupa para analizar si los mismos concurren o no:

- Consta aportado en autos Informe de la Dirección Provincial de La Rioja de la Tesorería General de la Seguridad Social de 23 de junio de 2005 conforme al cual el número de afiliados a dicha Institución a X S.A. asciende a 26.
Figura como domicilio de la misma calle Z (sic).
- Consta aportados copias de hasta siete Libros de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social referidos a Centros de Trabajo en Haro, en Logroño (calles Avenida de T, U, V y W) y en Calahorra.
En la mayoría aparece sede principal en Palma de Mallorca.

- Constan aportados copias de nóminas en las que se hacen constar diferentes domicilios en Logroño de X S.A.
 - Se aportan, igualmente, copias de cuotas de explotación mensualizadas referentes a distintas oficinas en La Rioja.
 - En lo que se refiere al Impuesto de Actividades Económicas, aparecen también altas en diferentes oficinas de Logroño.
 - En el acto de comparecencia, D^a CCC, Directora de la Oficina de la calle Y, manifestó que en la misma, además de ella, hay una Jefe de oficina, 6 ó 7 vendedores y una administrativo a media jornada para trabajos puramente administrativos. La contabilidad de la oficina la llevan desde Palma de Mallorca.
- Indicó, igualmente, que no existe un Jefe Regional en La Rioja, que su Oficina depende directamente de Palma, pero que el resto de oficinas dependen de un regional de la Zona Norte.
- En el mismo acto, D. DDD, representante de X S.A., manifestó que, aun siendo todos empleados de dicha empresa, internamente son dos empresas distintas, una comercializada como T y otra como X. La primera depende a nivel jerárquico directamente de Palma y la otra de la Zona Norte.

SÉPTIMO. La prueba practicada, toda la que las partes propusieron, arroja conclusiones que podemos considerar, incluso opuestas.

Así, a efectos de Seguridad Social parece existir un único Centro en Logroño, pero a efectos de la Inspección de Trabajo existirían varios.

No nos parece relevante el hecho de diferentes altas en el Impuesto de Actividades Económicas ya que precisamente la tributación al mismo se hacía en función del número de locales que se ocuparan, fueran o no un único Centro de Trabajo.

Sí que parece existir una diferente organización entre la Oficina de Y y las restantes.

La primera, que cuenta con más personal, dependería directamente de Palma de Mallorca y las restantes de la Zona Norte.

La contabilidad, sin embargo, está centralizada en todos los casos en Palma de Mallorca.

Tampoco parece trascendente el hecho de que la Oficina de Y cuente con un administrativo a media jornada.

Todas estas circunstancias podrían hacernos concluir la existencia de un Centro de Trabajo en dicha Oficina (cierta autonomía, diferente organización, etc.).

OCTAVO. Sin embargo, valorando todas las circunstancias concurrentes en nuestro caso, alcanzamos la conclusión de que la repetida Oficina no puede reputarse Centro de Trabajo.

En este sentido nos parece muy acertado el razonamiento contenido en la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Logroño de 30 de junio de 2006 en relación al proceso electoral celebrado en la empresa H, S.A.

Sentencia:

Por su similitud con nuestro caso, nos permitimos citar parte de dicha

"...la adopción de un criterio lógico -aunque a lo largo del proceso jurisdiccional laboral o en el laudo no se haya hecho constar el concreto número de trabajadores que presta servicios en cada uno, habiendo que suponer que hay algunos de más de 6 trabajadores y otros que no llegan a esta cifra según las alegaciones de las partes- aconseja considerara efectos de designación de representantes la totalidad de los trabajadores que prestan servicios en la empresa con independencia del centro de trabajo al que se hallen inscritos, con las consecuencias de representación inherentes.

En efecto, parece más que dudosa la pretendida autonomía de los centros de trabajo entre sí, por más que el número de trabajadores que presta servicios en los mismos sea variable, ya que se encuentran incardinados dentro de un esquema funcional que integra la globalidad de los mismos en ordena una actividad empresarial claramente delimitada en su objeto. La desagregación que sostiene el laudo impugnado -si bien desde un punto de vista formal se adecua a la ley- entendemos que soslaya la realidad electoral sobre la que incide el proceso de elección de representantes. Se trata de una empresa con una pluralidad de centros de trabajo, división ésta de carácter instrumental, gravitando el concepto de «unidad productiva» -atendiendo el ámbito local y el tipo de servicio que se presta- mas sobre la empresa en su conjunto, en lo que hace a la ciudad de Logroño, que sobre cada centro en particular. A nuestro juicio y con el debido respecto para la ponderada decisión arbitral, las consecuencias del

instrumento hoy impugnado implican a efectos electorales una desagregación artificial de lo que es una unidad en la realidad.

Es, por tanto, de plena aplicación al caso la previsión contenida en el art. 63.2 del Estatuto de los Trabajadores, en el sentido de que procede la agrupación de los centros de trabajo de la empresa radicados en el ámbito provincial, por mas que dicha norma exclusivamente se refiera en el Estatuto de los Trabajadores exclusivamente al Comité de Empresa, todo ello por la vía analógica del art. 4.1 del Código Civil. Y ello porque -con independencia de que en el laudo se cita jurisprudencia- las razones en que basamento la exclusión de la « semejanza o identidad de razón » de la norma civil no gozan -dicho sea igualmente con todo el respeto- del sustento jurídico adecuado al caso de autos. En efecto, hay que atender aquí fundamentalmente al carácter unitario del órgano de representación, sin que se advierta el carácter « individualizado » de la problemática que puedan presentar los centros de menos de 6 trabajadores respecto de los restantes. Claramente -siempre refiriéndonos a la realidad sobre la que se juzga- no se ven las razones que puedan justificar un trato jurídico diferenciado. Es perfectamente entendible que -dada la estructura empresarial anteriormente referenciada- los problemas de los centros de menos de 6 operarios sean los mismos que aquellos que empleen trabajadores en n° superior a tal cifra.

C.- Por último, en lo referente al derecho soberano de elección de representantes esgrimido en el laudo para los centros de más de 6 trabajadores, nota fundamental en que se apoya de cara a la declaración de nulidad del proceso, se trata de un criterio que a juicio del Juzgador debe claramente atemperarse. En efecto, debe considerarse la realidad de que -de prosperar dicho criterio- lo cierto es que -atendido el contexto de unidad empresarial que hemos tratado- se daría la paradoja de que en su seno coexistirían trabajadores con una representatividad « pura » (por hipótesis en el caso que nos ocupa, un centro) junto otros trabajadores sin derecho a tal representación. Solución que no cuadra adecuadamente a nuestro juicio con las reglas de la lógica y la equidad.”

En este mismo sentido, Laudos dados en Granada en noviembre de 1994 y en Zaragoza el 30 de diciembre de 1994:

"Tercero. Que, si bien es cierto, como afirma la empresa que, de acuerdo con el art. 3.1. del Código Civil, las normas deberán interpretarse en relación con el contexto,

atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas, es por ello, precisamente que debe interpretarse el art. 4.1.g) y 61 y ss. del ET en relación con su finalidad que no es otra sino propiciar la participación de los trabajadores en las empresas. En este sentido, si bien es cierto que el art. 63.2 impone la formación de un Comité conjunto cuando se trata de empresas de 50 trabajadores y algunos de los centros no alcanzan ese número, no parece razonable negar esa posibilidad de agrupación en los centros de trabajo cuando no lleguen a 50 trabajadores pero augurar (sic) los 30 trabajadores y ello por las siguientes razones:

1ª) Que es criterio de interpretación comúnmente admitido que lo no prohibido taxativamente por las normas jurídicas se ha de permitir y ello resulta particularmente aplicable en materia laboral.

2ª) La necesidad de evitar el ejercicio de la legítima potestad de organización del empresario pueda prestar cobertura a la privación del derecho básico de participación reconocido en el art. 4.1.g) del ET. La distribución en centros de trabajo pequeños no puede servir para que como sucede en este caso el 25% de los trabajadores se vea privado de representación por haber sido distribuidos en pequeños núcleos.

3ª) Que cabe la interpretación analógica, según el art. 4.1 del Código Civil, cuando las normas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. El primer inciso del art. 63.2 dispone la constitución de un Comité de Empresa conjunto para aquellas empresas que en la misma provincia tengan dos o más centros de trabajo cuyos censos no alcancen los cincuenta trabajadores pero que los sumen en su conjunto. Ciertamente, no se prevé igual regla, pero entre ambas situaciones, aparece una clara identidad de razón que consiste en favorecer al máximo posible la mayor participación en la empresas de sus trabajadores [arts. 129.2 ET y 4. 1.g) ET].

4ª) Por las razones expuestas no cabe admitir las objeciones planteadas por la empresa. No se trata de interpretación de la Ley sino aplicación analógica de una norma que altera el proceso electoral al disminuir el número de representantes correspondientes. Por la misma razón, sí hay falta de correlación entre el número de trabajadores y el número de representantes elegidos. Por último es precisamente el art. 3.1 del Código Civil el que propicia una interpretación analógica, que responde,

además, al espíritu y finalidad de la regulación de la participación de los trabajadores en la empresa.”

Por tanto procede estimar la impugnación realizada por los Sindicatos USO y CCOO y, en consecuencia, declarar la nulidad del proceso electoral desarrollado en la Oficina de X, S.A. ubicada en la calle Y, de Logroño.

Por todo ello, vistos y examinados los hechos enumerados y los preceptos legales citados y demás de general aplicación, vengo a dictar la siguiente

DECISIÓN ARBITRAL

ESTIMAR la reclamación planteada por los Sindicatos USO y CCOO, y en consecuencia declarar la nulidad del proceso electoral desarrollado en la Oficina de X, S.A. ubicada en la calle Y, de Logroño.

Del presente Laudo Arbitral se dará traslado a las partes interesadas, así como a la Oficina Pública para su registro.

Asimismo se advertirá a las partes que contra el mismo se podrá interponer recurso ante el Juzgado de lo Social de La Rioja, en el término de tres días desde su notificación, de acuerdo con lo establecido en el art. 76.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 42.4 del R.D. 1844/94, y arts. 127 y concordantes del T. R. de la Ley de Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95, de 7 de abril).

Logroño, a tres de octubre de dos mil seis.